

AGENDA CIUDADANA

EL SUR

Lorenzo Meyer

Supuestos.- Si se supone que los procesos electorales mexicanos ya son competitivos y que se llevan a cabo en condiciones de libertad, transparencia y equidad, entonces se deberá concluir que la oposición por la vía armada carece de razón tanto práctica como moral. Pero ¿en verdad la política actual corresponde a los supuestos anteriores?. Hay elementos para decir que no, al menos no en todo el país, no en el sur ni en el Golfo.

Violencia y Política.- Independientemente de nuestras preferencias, es un hecho que política y violencia son una mancuerna original e indisoluble. Pese a ello, el verdadero arte de la política consiste en mantener desactivada a la pareja, en lograr que las decisiones y las acciones de los múltiples actores que intervienen en el drama político se desarrollen sin violencia, que la autoridad lo sea por aceptación y no por temor. Un sistema político moderno, eficiente y legítimo, es aquel que ha logrado institucionalizar los procesos de formulación de demandas, negociación, toma de decisiones y ejecución de las mismas, sin que los involucrados, incluidos los perdedores, cuestionen la legitimidad del proceso.

La transformación de régimen que está experimentado México en este fin de siglo, tiene como objetivo central reconstruir la legitimidad de todo el sistema de

autoridad para cancelar toda vía violenta en política. Desafortunadamente, ese objetivo aún no se alcanza; todavía no es posible afirmar con la convicción que es producto de la autoridad moral, que quienes han optado por la acción armada para defender sus intereses y valores, no sólo están equivocados sino que tienen un discurso falso, objetivos inconfesables, y que por tanto la autoridad tiene tanto el derecho como la obligación de no transigir frente a su chantaje y de acabar con ellos usando incluso la violencia legítima de la que es la única detentadora.

Entre el Ser y el Deber Ser.- En vísperas de las elecciones federales de 1997, la sociedad mexicana mostraba, a la vez, el deseo de vivir en un sistema democrático y el rechazo a las estructuras políticas en las que vivía. En efecto, en una encuesta hemisférica de opinión de 1996, el 53% de los mexicanos dijeron preferir la democracia sobre cualquier otro sistema de gobierno (en el extremo superior estaban Costa Rica y Uruguay con el 80% de las preferencia y en el inferior Brasil, con apenas el 50%), pero únicamente el 11% aceptaron estar satisfechos con el tipo de gobierno que realmente imperaba en el país; ninguna de las otras quince naciones latinoamericanas donde se hizo la encuesta mostró tanta insatisfacción con su sistema político como la mexicana, (Latinobarómetro citado por el InteAmerican Dialogue, The Americas in 1997: Making Cooperation Work, Washington, D.C., mayo, 1997, p.16).

Seguramente el crucial proceso electoral de 1997 y sus resultados --la pérdida del control de la Cámara de Diputados por el partido de Estado y los triunfos de la oposición en los comicios locales de la Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro-- han de haber modificado positivamente la percepción de muchos electores mexicanos sobre la

naturaleza de las estructuras políticas. En efecto, en la medida en que el viejo monopolio político pierde fuerza y el pluralismo avanza, el proceso de democratización se hace real, creíble, para un número mayor de mexicanos; las alternativas de gobierno dejan de ser meras teorías para convertirse en realidades con impacto en la vida cotidiana de los electores.

Es precisamente este cambio el que ha obligado a reconsiderar la razón de ser del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e incluso del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Desde lo alto de la pirámide del poder y hasta las páginas de los periódicos o las conversaciones de sobremesa, se insiste en afirmar que el pasado 6 de julio México en su conjunto echó a andar la nueva maquinaria política que permite ya --o que obliga-- a la autoridad, a reconocer, procesar y responder a las demandas de la diversidad de grupos sociales y actores políticos significativos. En vista de lo anterior, y siempre según este argumento, las organizaciones armadas deben ajustarse a la nueva realidad -- desarmarse y canalizar sus energías por las vías institucionales-- o sufrir un legítimo castigo. Desafortunadamente la realidad no es tan clara como esta posición supone.

La Última Trincheras del Viejo Régimen.- Las cifras electorales muestran que el actual sistema de partidos funciona de manera relativamente aceptable en una amplia zona de la geografía mexicana, pero no en toda. En una parte del país ya hay una competencia efectiva entre partidos y que se da en condiciones menos inequitativas que en el pasado. Ahí, por tanto, es absurdo, por contraproducente, e inaceptable por inmoral, pretender modificar la agenda política por la vía armada. ¿Para que abrir una

puerta a balazos cuando ya no esta cerrada?. Sin embargo, también es necesario reconocer que el 6 de julio no fue en todas partes el parteaguas que si fue en el México urbano y moderno. Existe aún una trinchera donde el viejo sistema permanece vivo, y esa se encuentra fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en el sur del país y el Golfo de México. Ahí el partido de Estado sigue siendo el factor dominante y los viejos mecanismos del poder continúan operando. Ese sur y Golfo es también la región donde se concentra la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la falta de oportunidades y, finalmente, la injusticia histórica. Desde luego no es coincidencia que la pobreza sea funcional al antiguo régimen: es el atraso lo que permite a las maquinarias caciquiles reproducirse por la vía de la ignorancia, la necesidad, el temor y la inercia. Es en ese entorno donde la compra del voto y la coacción funcionan mejor que en ninguna otra parte del país.

En las elecciones para diputados federales que acaban de tener lugar, el PRI logró, con el 39.1% de los votos, hacerse del 54.6% de las diputaciones por el principio de mayoría relativa: 164 de 300. Y fue justamente en los estados del sur y Golfo donde el predominio priísta resultó proporcionalmente mayor y donde la nueva pluralidad --el indicador central de la modernidad-- se reflejó menos. En Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Oaxaca, el partido de Estado logró el 100% de las diputaciones (15 distritos en Puebla, 11 en Oaxaca, 6 en Tabasco, 3 en Tlaxcala, 2 en Quintana Roo y 2 en Campeche); en Chiapas el PRI ganó diez de doce distritos, pero en algunos de ellos los ganó a lo grande, a la manera antigua: con el 60% al 68% del voto; en contraste, perdió en las zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. En Yucatán, el PRI perdió dos de los cinco distritos, pero en los tres que ganó, lo hizo con el 64.4%

en promedio; desde luego los dos distritos que perdió el PRI de Víctor Cervera fueron los urbanos, los que corresponden a Mérida. El mismo fenómeno se repitió en Guerrero; ahí el PRI ganó 6 de 10 distritos, cinco de ellos con el 50% o más del voto, pero perdió en los más poblados y urbanos, Acapulco entre ellos. Finalmente esta Veracruz, ahí el PRI mantuvo 20 de los 23 distritos, aunque sus victorias fueron más modestas, nada de victorias con el 60% o más de los votos, y, de nuevo, entre menos habitantes y menos concentraciones urbanas, mejor para el PRI.

Es verdad que los bastiones del viejo partido de Estado no están exclusivamente en el sur y el Golfo de México, Zacatecas, Nayarit, Hidalgo o Baja California Sur, son ejemplos de zonas priístas fuertes, pero es igualmente cierto que algunos de esos estados no están alejados en sus indicadores socioeconómicos de los del sur. Por otro lado, Morelos, aunque sureño, resultó una pérdida para el PRI, que sólo ganó uno de los cuatro distritos en disputa; la excepción se explica, en buena medida, porque sus condiciones socioeconómicas ya no son las dominantes en el sur sino en el centro.

Finalmente, es verdad que también hay ejemplos de entidades con dominio completo de la oposición, como es el caso del Distrito Federal --aquí el PRD se llevó 29 de los 30 distritos en disputa con un total del 45.3% de la votación--, pero en el caso de la capital, nadie puede argumentar que se trató de una elección a la antigua; todo lo contrario, aquí cada posición fue disputada palmo a palmo, con las reglas de la modernidad funcionando a plenitud, exactamente como en Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Querétaro o Jalisco, por mencionar ejemplos conspicuos.

Los Indicadores Socioeconómicos.- Que la geografía del pobreza coincide mucho con la de la fuerza priísta, se puede comprobar empleando los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Usando las cifras del censo de 1990 y combinado 24 indicadores sociales (educativos, demográficos, económicos, ocupacionales y de urbanización), se pueden dividir los estados de la República en siete estratos, que van de menor a mayor, (INEGI, “Estratifique. Sistema para la clasificación de estados y municipios”, 1993). El nivel inferior lo ocupan Chiapas, Oaxaca y Guerrero, justamente tres de las entidades de gran predominio priísta. En el estrato siguiente se encuentran colocados el otro grupo de entidades sureñas y del Golfo: Tabasco, Yucatán, Campeche, Puebla y Veracruz en compañía de Hidalgo, otro bastión del PRI y San Luis Potosí. En realidad sólo dos de las entidades del sur escapan a la dualidad pobreza aguda-priísmo: Tlaxcala y Quintana Roo. En contraste, las regiones geopolíticas donde la oposición ha echado raíces muy fuertes, tienden a agruparse en los estratos más altos: el Distrito Federal y Nuevo León, seguidos de Baja California, Jalisco, Estado de México y Morelos.

Conclusión.- Para desterrar de nuestra desafortunada historia política a la violencia como instrumento de la lucha entre dominadores y dominados, entre poderosos y carentes de poder, entre la injusticia extrema y la exigencia de justicia, se debe de hacer evidente a los perdedores de siempre que las elecciones son, por fin, una vía real y efectiva de empezar a balancear las cargas, a deshacer los desequilibrios históricos. En los hechos y no sólo en el discurso, la vía pacífica, legal y democrática, debe probar a los más desafortunados que si bien no va a conducir a una victoria total de la justicia sustantiva, si va a impedir que se mantenga su derrota absoluta. En suma, la democracia

política debe ser real y efectiva para hacerse, si no atractiva, al menos racional para el EZLN o para el EPR. Desgraciadamente tal y como operó el proceso electoral de 1997 en el sur y oriente del país --sirvió de parapeto a la línea dura del PRI-- es muy difícil, por no decir que imposible, que sea visto como alternativa a los grupos que en Chiapas, Oaxaca o Guerrero han optado por la acción directa para reclamar su derecho a no seguir siendo marginados y a tener una vida más digna. Se trata de un derecho que las leyes y el discurso les han ofrecido desde el siglo pasado, pero que en la práctica les ha sido negado una y otra vez. Si la economía y la política mantienen su carácter excluyente en el sur mexicano, ¿realmente se puede persuadir a los armados que ya existe una vía práctica y moral mejor para lograr la justicia por la que dicen luchar?.

. .